

Rancagua, veintiuno de febrero de dos mil veintidós.

Vistos:

En este proceso RIT 315-2020, RUC 1900758087-0, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, por sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se condenó al sentenciado Jacobo Daniel Solís Quevedo, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de ocho unidades tributarias mensuales, inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica, y accesorias legales, como autor del delito de conducción en estado de ebriedad con resultado múltiple de muerte, todos en concurso ideal, ilícito previsto y sancionado en el artículo 196 de la Ley N° 18.290 con relación al artículo 75 del Código Penal, cometido el día 16 de julio de 2019, en la comuna de Rancagua.

En contra de esta decisión, la defensa del condenado ha deducido recurso de nulidad fundado en la causal de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal.

Con fecha 1 de febrero último, se procedió a la vista de la causa, oportunidad en la que alegó en estrados la parte recurrente, los querellantes y el instructor de la misma, fijándose la audiencia del día de hoy para la lectura de la presente sentencia.

Considerando:

Primero: Que el recurso de nulidad se sustenta en el motivo de la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento de la sentencia se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, concretamente para el caso, la aplicación del concurso ideal conforme a la regla del artículo 75 del Código Penal, en abierta oposición con lo dispuesto en los artículos 110, 196 incisos 2° y 3° de la Ley 18.290, lo que se tradujo en la imposición de una pena superior a la que legalmente habría correspondido aplicar.

Segundo: Que en la historia fidedigna del establecimiento del proyecto que en definitiva se materializó en el Código Procesal Penal, se dejó expresa constancia del carácter genérico de las causales de nulidad del artículo 373. Se expuso -en su oportunidad- que este recurso apunta a dos objetivos perfectamente diferenciados: la cautela



del racional y justo procedimiento -mediante el pronunciamiento de un tribunal superior sobre si ha existido o no respeto por las garantías básicas en el juicio oral y en la sentencia recaída en él, de forma que, si no hubiere sido así, los anule- y el respeto de la correcta aplicación de la ley -elemento que informa el recurso de casación clásico, orientado a que el legislador tenga certeza de que los jueces se atenderán a su mandato-, pero ampliado en general a la correcta aplicación del derecho, para incorporar también otras fuentes formales integrantes del ordenamiento jurídico. (Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, “Los Recursos Procesales”, Editorial Jurídica de Chile, segunda edición actualizada, página 349).

El reproche del recurrente de nulidad, en consecuencia, debe entenderse dirigido sólo al eventual error que observe en la interpretación y aplicación del derecho llamado a regir ese hecho intangiblemente determinado, porque la causal supone la aceptación de los hechos tal y como han sido fijados por el tribunal y supone también, que de existir el error que se endilga, aquel tenga influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por consiguiente, si el recurso se construye a partir de hechos que el fallo no ha tenido por probados o se refiere a hechos distintos de los asentados, o bien no afecta de modo alguno lo dispositivo de la resolución que se impugna, la nulidad habrá de ser evidentemente desestimada.

En síntesis, habrá lugar a la causal de nulidad en análisis, cuando a) exista una contravención formal al texto de la ley, es decir, cuando el juzgador vulnere de manera palmaria y evidente el texto legal; b) cuando se infraccione el verdadero sentido y alcance de una norma jurídica que sirvió de base o fundamento para la dictación de la sentencia y; c) cuando exista una falsa aplicación de la ley, situación que se verifica cuando el juzgador deja de utilizar una norma jurídica, siendo pertinente su aplicación.

Tercero: Que dicho lo anterior y respecto de las alegaciones de fondo, endilga el recurrente un error del tribunal cuando estimó que los presupuestos fácticos que dan origen a la presente causa determinan -erróneamente- un concurso ideal homogéneo, haciendo aplicación, en consecuencia, de lo dispuesto en el artículo 75 del Código Penal e



imponiendo al encartado la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, sanción distinta y probablemente más alta que la que a juicio del recurrente le habría correspondido de no haber desatendido el tenor literal de lo dispuesto en el artículo 196 inciso 3° de la Ley de Tránsito, conforme al cual: *“Si se causare alguna de las lesiones indicadas en el N° 1 del artículo 397 del Código Penal o la muerte de alguna persona, se impondrán las penas de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, en el segundo. En ambos casos, se aplicarán también las penas de multa de ocho a veinte unidades tributarias mensuales, de inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito, sin perjuicio”*.

Conforme a la disposición citada, estima el recurrente, correspondería aplicar la divisible de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, a lo que debe adicionarse el inciso segundo de la misma norma cuando señala que para aplicar el máximo debe el autor ser reincidente en delito de la misma especie; o desempeñarse regularmente en el transporte de personas o, finalmente, haber conducido con su licencia cancelada o haber sido inhabilitado a perpetuidad para conducir vehículos motorizados, todas hipótesis en las que no se encuentra el imputado de autos.

Reforzaría los postulados de la defensa además, lo dispuesto por el artículo 196 bis de la citada ley de tránsito, cuando señala que para determinar la pena en los casos previstos en los incisos tercero y cuarto del artículo 196, el tribunal no tomará en consideración lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 68 bis del Código Penal, y en su lugar aplicará las reglas establecidas en la norma.

Detalla asimismo que los sentenciadores en el considerando décimo segundo del fallo impugnado entienden que hay tantos manejos con resultado de muerte como personas perdieron la vida en el accidente que da origen a la presente causa, lo que a su juicio, constituiría un yerro evidente pues no estamos frente a una hipótesis concursal, por lo que resulta improcedente hacer aplicación de aquel, agregando que, aun cuando se estimara que existe una acción con



varios resultados típicos, la Ley 18.290 en las disposiciones transcritas resuelve expresamente una solución diversa, cuestión que ha de ser preferente al tratarse de una norma de carácter especial.

Cuarto: Que, resulta indispensable considerar que el fallo impugnado fijó como hechos de la causa los siguientes: “El día 16 de julio de 2019, en horas de la madrugada, el acusado Jacobo Daniel Solís Quevedo, condujo el vehículo marca Kia Sportage P.P.U. CCWR-70, desde el casino Monticello, ubicado en la comuna de Mostazal, hacia la ciudad de Rancagua, transitando por la ruta 5 Sur, cuando alrededor de las 5:50 horas, en el kilómetro 83.200, frente al Centro Penitenciario de Rancagua, producto de que había consumido alcohol en horas previas, que no había obtenido licencia de conducir ante la autoridad competente y que se desplazaba a una velocidad superior a 150 Km/hora, perdió el control del móvil, chocando con la barrera de contención ubicada al costado poniente de la calzada, cayendo luego en un terreno en desnivel, volcándose el vehículo que conducía. Debido al impacto y posterior volcamiento del móvil, los acompañantes del imputado en el vehículo: Nicole Alejandra Barrera Bolbarán, Gonzalo Ignacio Lizana Améstica, Luis Marcelo Parra Villarroel y Vanessa Carolina Burgos Gutierrez, fallecieron en el lugar al resultar con politraumatismos esquelético y visceral. La ebriedad del acusado Solís Quevedo fue constatada por funcionarios policiales, por el propio reconocimiento espontáneo y voluntario de éste en torno a haber consumido alcohol y por el hálito alcohólico que éste presentaba, arrojando el examen respiratorio intoxilyser la cantidad de 1.01 gramos de alcohol por litro de sangre, dando posteriormente como resultado la respectiva alcoholemia 0.94 gramos de alcohol por litro de sangre”.

Que como ya se dijera en el motivo Segundo que antecede, los hechos consignados resultan inamovibles para esta sede y, a partir de los mismos, es posible concluir que estamos en presencia de varias realizaciones simultáneas del supuesto de hecho de una norma punitiva, es decir, del presupuesto de un concurso auténtico de delitos. (En oposición al concurso aparente).

Quinto: Que, nuestro sistema conoce dos categorías de concursos auténticos que se resuelven conforme al régimen de



aspersión, el concurso ideal (regulado en el art. 75 Código Penal) y la reiteración de delitos (regulados en el art.351 Código Procesal Penal). En el primer caso, (concurso ideal) se presupone la satisfacción de dos hipótesis diversas, (i) un mismo hecho es constitutivo de dos o más delitos (ideal propio), o (ii) un hecho constitutivo de delito es el medio para cometer otro (ideal impropio o medial), y en ambos casos, se deberá imponer la pena mayor asignada al delito más grave.

Resulta claro, frente a los hechos probados, que nos encontramos ante la hipótesis del concurso ideal propio. Luego y, como acertadamente razona la sentencia impugnada, el delito corresponde al de manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte, cuya pena está regulada en presidio menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo, además de una multa de 8 a 20 unidades tributarias mensuales, la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el comiso del vehículo en que se haya cometido el delito.

Existiendo además dos circunstancias atenuantes que benefician al encartado, la pena en principio, radicará en el grado inferior de la divisible, sin embargo, tampoco es controvertido que siendo una pena compuesta por dos grados, la pena mayor corresponda al superior de estos, y estimando que se trata de un concurso ideal deberá imponerse este último, pues sólo de esta manera se expresa correctamente el merecimiento de castigo en el autor.

Sobre este punto conviene tener presente además que la disposición del artículo 196 bis de la citada Ley 18.290, no suprimió dentro de las reglas de aplicación de penas, lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, por lo que la infracción que se endilga no tendría la influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, si pensamos que el sentenciador estaba facultado para imponer un castigo todavía mayor. En este contexto, las alegaciones del recurrente corresponden a una expectativa de aquel que no necesariamente habría de tener un correlato como el que esperaba.

Sexto: Que, sobre el particular resulta especialmente relevante también considerar que la argumentación entregada por el recurrente, presupone olvidar que existe para el caso de autos, pluralidad de hipótesis y que el artículo 196 incisos segundo y tercero, como norma



especial, tiene aplicación preferente ante la hipótesis que en ella se describe, es decir, un hecho único con un solo resultado.

Séptimo: Que a mayor abundamiento y, en este mismo sentido, se ha pronunciado nuestra Excma. Corte Suprema en los autos Rol 20.900-2020, advirtiéndole que la solución de las disposiciones citadas por el recurrente tienen aplicación cuando se trata de un solo resultado, toda vez que la norma del artículo 196 bis de la Ley 18.290, no hace referencia alguna a este tipo de concursos y se sitúa en hipótesis de resultados únicos. La comprensión que de la norma realiza el máximo tribunal, resulta coherente con una interpretación sistémica de la misma y con el sentido que el legislador le ha dado a las últimas modificaciones introducidas a la citada ley de tránsito, que en general han buscado endurecer el castigo de los delitos como aquellos que se conocen con ocasión de la presente causa.

Octavo: Que, como segundo argumento endilga el recurso que aun cuando el riesgo materializado -en el caso de autos- sea la muerte de cuatro personas, el tipo penal continúa siendo un delito de mera actividad y no de resultado, por cuanto, no existiría el elemento subjetivo que vincula la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas con la muerte que se produjo en definitiva, de modo tal que, no es posible afirmar que quien decide conducir un vehículo en estado de ebriedad, conociendo y queriendo la realización de dicha conducta típica, conoce y quiere también ocasionar la muerte de una o más personas, estimando que en aquel caso, se estaría frente a un homicidio simple.

Agrega que, no siendo controvertido que la norma aplicable es la del tipo penal descrito en el artículo 196 inciso 3° de la Ley 18.290, la correcta calificación que le cabe las muertes en el delito de conducción en estado de ebriedad, es el de ser condiciones objetivas de punibilidad, las que por razones de política criminal, en relación al bien jurídico, condicionan la imposición o medida de la pena, escapando a la consideración relativa a la contribución subjetiva del agente. Lo anterior, para sostener, en definitiva, que la muerte no forma parte de la tipicidad del delito de conducción en estado de ebriedad del precitado artículo 196 inciso 3°, y no es abarcada por el



dolo del sujeto activo, sino que se limita a establecer la medida del castigo. En consecuencia, no existan 4 delitos de conducción en estado de ebriedad causando muerte o sólo uno con 4 resultados, sino únicamente un delito con una condición objetiva de punibilidad que determina, desde ya y conforme la norma referida, el quantum del castigo a imponer.

Noveno: Que, conforme lo dicho en el considerando que antecede, el recurrente presupone que la muerte, en estos casos, se limita a decirnos el marco punitivo aplicable, ergo una o varias muertes, a consecuencia de una misma acción tendrán un castigo necesariamente único e invariablemente idéntico.

Esta interpretación, -novedosa por cierto-, resulta contraria a las consideraciones retributivas, distributivas e incluso restaurativas de la pena, por cuanto, en la solución propuesta por la defensa, no se logra expresar correctamente el merecimiento de castigo en el agente o autor (siendo esa justamente la razón que explica las soluciones concursales). Resulta contraintuitivo desde un punto de vista sistémico, el que una o cuatro muertes se expresen siempre en una sola y misma sanción, como pretende el recurrente.

Por otra parte, a juicio de esta sede, la distinción no es si se trata de un delito de resultado o de mera actividad, (clasificación que presta utilidad más bien a la hora de establecer el iter criminis o grado de desarrollo en la ejecución del hecho), sino más bien aquella distinción que nos dice que estamos frente a un delito de peligro abstracto (en oposición a uno de peligro concreto), donde lo que se castiga es la concreción del riesgo que se materializa y que se entiende aceptado por el agente *ex ante* (cualquiera sea este), salvo la concurrencia de alguno de los criterios de imputabilidad objetiva, creados justamente de manera inorgánica para responder a los excesos que puede alcanzar la sanción por esta clase de delitos, cuyo no es el caso.

Décimo: Que en razón de todo lo antes expuesto y por no configurarse los presupuestos de la causal de nulidad previstos en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, el recurso de nulidad interpuesto, debe ser declarado necesariamente sin lugar.



Por estas consideraciones y visto además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en los artículos 372 y siguientes del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del encartado en contra de la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua, en la causa RIT 315-2020, RUC 1900758087, la que, en consecuencia, **no es nula**.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra Sra. Bárbara Quintana Letelier.

Rol Corte N° 20-2022

No firma el Ministro Sr. Santibáñez, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal. No obstante de haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministra Barbara Quintana L. y Abogado Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, veintiuno de febrero de dos mil veintidós.

En Rancagua, a veintiuno de febrero de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 05 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>.